



**Asociación Española
de Ciencia Política y de
la Administración**

XV CONGRESO DE LA AECPA (JULIO 2021)

ÁREA VII: GÉNERO Y POLÍTICA

GT 7.1 La desigualdad de género en tiempos de la Covid-19

Título de la ponencia:

LA BRECHA DE GÉNERO DURANTE LA PANDEMIA: ¿HAN AUMENTADO LAS DISPARIDADES EN LAS PREFERENCIAS DE POLÍTICA PÚBLICA DE HOMBRES Y MUJERES EN TIEMPOS DE LA COVID-19?

Autora:

RUTH CICUÉNDEZ SANTAMARÍA

Profesora del Área de Ciencia Política y de la Administración. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos.

Correo electrónico: ruth.cicuendez@urjc.es

Resumen de la ponencia:

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 no solo ha puesto de relieve que siguen existiendo importantes desigualdades de género en el ámbito económico, laboral o familiar, sino que hay constancia de que la pandemia ha afectado de diferente manera y con diferente intensidad a mujeres y hombres. En este contexto, es lógico suponer que mujeres y hombres tienen distintas necesidades inmediatas y expectativas, y en consecuencia, tendrán distintas percepciones y actitudes respecto a cuáles son en este momento los principales problemas sociales en los que el Estado debe intervenir, sobre cuáles han de ser las prioridades políticas y sobre cómo deben repartirse los recursos públicos para hacer frente a los efectos de la crisis.

El objetivo de la ponencia es analizar la brecha de género en las preferencias de política pública durante la pandemia, partiendo de la hipótesis de que la fractura se ha ampliado. Para ello, se estudian las disparidades en las demandas de gasto público de mujeres y hombres en cinco políticas fundamentales del Estado de Bienestar que pueden contribuir a paliar la problemática originada por la crisis sanitaria: protección al desempleo, sanidad, educación, seguridad social y ayuda a personas dependientes. La finalidad es determinar si han aumentado las diferencias en las actitudes de ambos sexos hacia el gasto destinado a financiar estas políticas sociales básicas para enfrentarse a esta situación.

La investigación empírica se fundamenta en el análisis de los datos demoscópicos correspondientes a los estudios del CIS “Opinión Pública y Política Fiscal” realizados entre los años 2019 y 2021, antes y durante la crisis de COVID-19. Los resultados indican que, efectivamente, la pandemia está teniendo consecuencias negativas sobre la igualdad de género y que, en este escenario, la brecha de género en las preferencias de gasto se ha incrementado. El gap es más amplio en desempleo y pensiones, mientras que el apoyo al crecimiento del gasto en sanidad es similar entre mujeres y hombres.

Palabras clave: brecha de género, políticas publicas, preferencias políticas, desigualdades de género, pandemia.

Nota biográfica: Profesora del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (URJC). Sus áreas de trabajo incluyen relaciones intergubernamentales, actitudes hacia el gasto público y los impuestos, preferencias políticas y género, y conciencia mediambiental. Sobre estas últimas materias ha publicado recientemente un libro en el INAP, y diversos artículos. Forma parte del Grupo de Alto Rendimiento en Buena Gobernanza de las Instituciones Públicas y Privadas de la URJC.

INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19 tiene implicaciones sustanciales para la igualdad de género, cuyos efectos no solo nos afectarán mientras dure la pandemia, sino durante la posterior fase de recuperación (Alon *et al.*, 2020). Esta gravísima situación ha puesto de relieve que siguen existiendo importantes desigualdades en el ámbito económico, laboral o familiar y, de hecho, hay constancia de que la pandemia ha afectado de diferente manera y con diferente intensidad a mujeres y hombres (Guillén, 2021). Este fenómeno trae de nuevo al centro del debate académico y social algunas de las cuestiones críticas para alcanzar la plena igualdad de género: cuidado de niños, ancianos y personas dependientes, bienestar, empleo, conciliación de la vida laboral y familiar, vulnerabilidad, violencia de género, etc. En este contexto, es lógico suponer que mujeres y hombres tienen distintas necesidades inmediatas y preocupaciones y, en consecuencia, tendrán distintas actitudes y preferencias respecto a cuáles son en este momento los principales problemas sociales en los que el Estado debe intervenir, sobre cuáles han de ser las prioridades políticas y sobre cómo deben repartirse los recursos públicos para hacer frente a los efectos de la crisis.

Así pues, el propósito de la ponencia es analizar la brecha de género en las preferencias de política pública durante la pandemia, con el objetivo de establecer si en este convulso período han aumentado, y en qué medida, las diferencias en las actitudes sociopolíticas de ambos sexos¹ al tiempo que se intensificaban las desigualdades de género. Con esta finalidad, se estudian las disparidades en las preferencias de gasto público de mujeres y hombres en cinco políticas fundamentales del Estado de Bienestar que deben contribuir a paliar la problemática originada por la crisis sanitaria: protección al desempleo, sanidad, educación, seguridad social y ayuda a personas dependientes. Se parte de la hipótesis de que durante la pandemia se ha ampliado la fractura de género en las preferencias de política pública.

La pandemia ha incidido negativamente en esferas básicas del sector público –como educación, sanidad o servicios sociales–, y en otros sectores económicos donde la tasa de feminización del trabajo es elevada (OIT, 2020). Asimismo, se han multiplicado las tareas domésticas, y las necesidades de cuidado de niños y de personas vulnerables, debido al cierre

¹ Se utiliza la palabra “sexo” para referirse a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, en contraste con “género” que refleja roles y expectativas socialmente construidos que se atribuyen al sexo masculino y femenino. En la ponencia se estudian las preferencias políticas en función del sexo y no de la identidad de género.

de colegios y centros sociosanitarios y, aun cuando parece que ha habido un cambio hacia una distribución más equitativa de las tareas del hogar y de la atención a los niños, los datos indican que la mayor parte del trabajo adicional ha recaído sobre las mujeres (Farré y González, 2020). Por otra parte, han crecido extraordinariamente el desempleo y la precariedad laboral lo que, previsiblemente, afectará más a las mujeres. En este sentido, es pertinente investigar si uno de los impactos de la emergencia sanitaria ha sido el aumento del apoyo por parte de las mujeres a la intervención pública en estas áreas, así como el aumento de la demanda del gasto público destinado a financiar aquellas políticas sociales que les podrían beneficiar en esta situación.

Desde los años ochenta, los politólogos han analizado la brecha de género en las preferencias políticas y en los comportamientos electorales (Saphiro y Mahajan, 1986). Este tema es relevante porque la evidencia empírica demostraba que mujeres y hombres tenían distintas posiciones ideológicas y, además, tenían distintas actitudes respecto al papel que el Estado debe tener en la provisión a la sociedad, a cuáles han de ser las áreas prioritarias de intervención estatal o respecto a la distribución de los recursos públicos entre las diversas políticas públicas. Si bien investigaciones recientes sugieren que este gap ha ido reduciéndose en España en las dos últimas décadas (Cicuéndez, 2018), la pandemia podría suponer un punto de inflexión en esta tendencia. En consecuencia, resulta relevante intentar contestar a las siguientes preguntas: ¿tienen distintas actitudes mujeres y hombres respecto a cuál debe ser en esta etapa el papel del Estado en la provisión de medios a la ciudadanía?; ¿ha aumentado significativamente la fractura de género en las preferencias de gasto público, en las opiniones sobre la asignación de los recursos públicos, a raíz de la crisis sanitaria y económica de la COVID-19?

La investigación empírica se fundamenta en el análisis de los datos demoscópicos procedentes de los estudios anuales del CIS “Opinión Pública y Política Fiscal” realizados entre los años 2019 y 2020, antes y durante la emergencia sanitaria, y en los datos procedentes de diversos Barómetros aplicados entre 2019 y 2021. Se trata de un trabajo esencialmente descriptivo, una primera aproximación indagatoria sobre la evolución de la brecha de género en las preferencias de política pública a lo largo de la pandemia.

MARCO ANALÍTICO: GÉNERO, PREFERENCIAS POLÍTICAS Y PANDEMIA

Los politólogos han investigado la brecha de género² en las actitudes y preferencias políticas en un amplio número de democracias occidentales desde la década de los sesenta (véanse Saphiro y Mahajan, 1986; Norrander, 2008), sin haber llegado a una conclusión definitiva. Mientras que algunos estudios de opinión demostraron que las mujeres son ideológicamente más conservadoras, otros trabajos han constatado que, desde hace tiempo, muestran posturas más progresistas (Lizotte, 2020). Este fenómeno se ha denominado “moderna brecha de género” (Inglehart y Norris, 2003), en referencia a que las mujeres se sitúan en el espectro ideológico más hacia la izquierda que los hombres y, por ello, tienden a votar en mayor proporción a partidos de izquierda o centro-izquierda, que incluyen en su agenda política temas relacionados con la igualdad de género (Giger, 2009; Gidengil *et al.*, 2003). Los datos sugieren que a medida que las mujeres se han integrado mayoritariamente en el mercado laboral –experimentando en muchos casos desigualdades salariales–, a medida que alcanzan mayores niveles educativos y a medida que consiguen mayor independencia económica, sus posiciones ideológicas parecen orientarse pre eminentemente hacia la izquierda (Abendschön y Steinmetz, 2014; Giger, 2009; Iversen y Rosenbluth, 2006)

Lo cierto es los resultados de algunas publicaciones son ambiguos, porque las opiniones políticas de las mujeres son heterogéneas y multidimensionales, no monolíticas, por lo que es difícil establecer la relación exacta entre ideología y género sin tener en cuenta que existen muchas identidades, no solo la de género (Deckman *et al.*, 2020: 1020). En consecuencia, el debate científico sobre la existencia de disparidades en las preferencias políticas inherentes al género continúa vigente (Gidengil y Stolle, 2021; Blau y Kahn, 2017; Croson y Gneezy, 2009; Crowder-Meyer, 2007).

Uno de los aspectos más relevantes de esa brecha de género es que las disparidades políticas e ideológicas estarían relacionadas con diferentes actitudes hacia el Estado, hacia las políticas públicas, hacia la intervención gubernamental y hacia el gasto público, es decir, el *gender gap* afecta a las preferencias políticas en un sentido amplio (Caughell, 2016: 4). Así, las mujeres manifestar más apoyo al Estado de Bienestar –son potenciales beneficiarias de numerosos programas de bienestar– (Svallfors, 1997: 290), son partidarias en mayor medida de

² La expresión “*gender gap*” fue acuñada por la feminista Eleanor Smeal en su famoso artículo de 1980 “*The Feminist Factor*”, en referencia a las disparidades en el voto de mujeres y hombres en las elecciones presidenciales norteamericanas de ese año.

una amplia intervención por parte del Estado en el ámbito social, son más favorables a las políticas de equidad y las políticas fiscales de carácter redistributivo, y al aumento del gasto social (Lizotte, 2020; Barnes y Cassese, 2017; Fox y Oxley, 2015; Norrander, 2008; Kaufmann, 2006; Alvarez y McCaffery, 2003). En esta misma línea, también hay evidencia de una brecha de género en las actitudes específicas hacia la crisis creada por coronavirus y hacia las acciones del gobierno en este contexto (Deckman *et al.*, 2020).

La revisión de la literatura internacional permite constatar que cada sexo tiene preferencias específicas en la mayoría de las áreas de política pública. Las mujeres son más proclives a una amplia e intensa intervención del Estado en economía (Migheli, 2014: 39-41), concretamente en la regulación del mercado para evitar las consecuencias negativas del sistema de libre competencia, a través de sistemas de protección social y mecanismos de redistribución (Caughell, 2016; Huddy *et al.*, 2008; Crowder-Mayer, 2007; O'Neill, 2003). Por el contrario, los hombres se inclinarían por el individualismo económico, la libre competencia y el riesgo (Croson y Gneezy, 2009).

Por otra parte, las mujeres favorecen, prioritariamente, el desarrollo de políticas sociales y, consecuentemente, demandan que se dediquen cuantiosos recursos públicos a financiar los programas relacionados con sanidad, educación, infancia, vivienda o atención a los colectivos más desfavorecidos, así como a sufragar las pensiones y las prestaciones por desempleo (Shorrocks y Grasso, 2020; Caughey *et al.*, 2019; Huddy *et al.*, 2008). Esto podría implicar que ciertas políticas públicas, con características singulares, contribuyen más que otras a ampliar la fractura de género (Finseraas *et al.*, 2012: 236-237).

Las teorías económicas sobre la brecha de género argumentan que estas diferencias actitudinales son debidas a que las mujeres son más vulnerables económica, laboral y socialmente que los hombres, y tienen más posibilidades de acceder a prestaciones económicas y servicios públicos, por lo que es lógico que apoyen el incremento del gasto social (Norrander, 2008). Es la tesis del interés propio (*self-interest*). Aquellas están, habitualmente, en posiciones económicas más débiles, dado que su nivel medio de ingresos es más bajo, ocupan peores puestos de trabajo, con malas remuneraciones y con mayor tasa de temporalidad, y suelen hacerse cargo de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. En esta situación es previsible que sean más propensas a apoyar el aumento del gasto social y redistributivo que los hombres (Iversen y Rosenbluth, 2006; Erie y Rein, 1988). Andersen (1999) explica que las mujeres perciben de manera más clara y cercana los efectos de las políticas de gasto, porque es más

probable que sean responsables del cuidado de niños o ancianos, o que se queden sin empleo, y en estas circunstancias utilicen los servicios de educación, sanidad, asistencia social o empleo. Esto implica que tendrán un interés directo en que haya un sistema redistributivo en el que la recaudación de impuestos permita mantener y aumentar el gasto destinado a estos servicios.

Las teorías sociológicas inciden en que la brecha de género puede explicarse a través de la socialización en roles de género (Diekman y Schneider, 2010). Este proceso implica que mujeres y hombres asimilan distintos valores y comportamientos, generándose un sesgo de género actitudinal (Caughell, 2016: 25). Las primeras tienden a interiorizar aquellos valores relacionados con la equidad, la cooperación y la compasión, mientras que los segundos tienden a asimilar los valores vinculados a la agresividad, la competición o el individualismo. Lizotte (2020: 31) afirma que este tipo de socialización lleva a que “las mujeres parezcan tener una mayor preocupación por el bienestar de los demás”, y adopten una posición altruista, lo que motiva que tengan opiniones más progresistas en muchos temas políticos y que demanden mayor gasto en bienestar social (Huddy *et al.*, 2008).

La actual crisis de la COVID-19 ha tenido graves impactos que han afectado más intensamente a las mujeres, quienes tienen menores ingresos, puestos de trabajo menos estables y peor pagados, mayores responsabilidades de cuidado y, por tanto, mayor necesidad de utilizar los servicios públicos y acceder a ayudas económicas. En consecuencia, es previsible que el aumento del gasto en las principales políticas sociales y el incremento de determinados servicios y prestaciones sociales sean de particular interés para ellas en este contexto (Shorrocks y Grasso, 2020: 301). Por este motivo, los científicos sociales se han focalizado en examinar la brecha de género “emergente”, esto es, las diferencias en las actitudes y preocupaciones respecto al impacto del Coronavirus y respecto a la respuesta gubernamental a esta situación inédita e incierta (Deckman *et al.*, 2020: 1021).

Ya se dispone de un buen número de investigaciones que, a lo largo del último año, han analizado las diferencias de género en actitudes, creencias, preferencias y comportamientos durante la pandemia (véase, Galasso *et al.*, 2020). Han confirmado que las mujeres tienen una preocupación significativamente mayor por la salud y el bienestar económico de ellas mismas, pero también de quienes les rodean, por lo que son más partidarias de una fuerte intervención pública para ayudar a la población (Fan *et al.*, 2020; Deckman *et al.*, 2020). Seguramente, esto sea debido, como se explicó, a los distintos impactos de la crisis en ambos grupos, y a que la tolerancia al riesgo es menor entre las mujeres (Adams-Prassl *et al.*, 2020). Asimismo, se

muestran más pesimistas respecto al impacto del coronavirus en su salud, y en su situación financiera, y están bastante más preocupadas por lo que sucede, incluso le atribuyen mayor gravedad a la pandemia que los hombres (Fan *et al.*, 2020: 9-10; Galasso *et al.*, 2020: 27286).

Las percepciones y actitudes de hombres y mujeres ante la COVID-19 son, por tanto, distintas, lo que pudiera estar relacionado con la asunción de roles de género tradicionales. Por un lado, a los hombres se les atribuye con frecuencia el liderazgo y la capacidad de tomar decisiones en el ámbito familiar y laboral, y ser la principal fuente de ingresos en el hogar (De Paz *et al.*, 2020). Por otro, a las mujeres le correspondería el rol de cuidadoras de niños, ancianos y enfermos, realizar las principales tareas domésticas, y adquirir alimentos y suministros para el hogar (WEF, 2020). Estos papeles parecen haberse diferenciado más, especialmente durante el confinamiento. De hecho, los resultados de un estudio de Rosenfeld y Tomiyama (2021) confirmaron que en este período hombres y mujeres se ajustaban más firmemente a los roles de género tradicionales, y creían más firmemente en los estereotipos de género convencionales que antes de la pandemia.

Algunos trabajos sugieren que la crisis sanitaria y económica tendrá un fuerte efecto negativo sobre las mujeres en los próximos años, reduciendo a sus oportunidades laborales a corto y medio plazo y su nivel de ingresos, y empeorando su situación en el hogar (Alon *et al.*, 2020; Kristal y Yaish, 2020). En la medida en que se pongan en marcha sistemas de protección, políticas laborales y sociales que ofrezcan apoyo a las familias y que traten de limitar estos efectos, el impacto sobre las desigualdades de género será menor. Por consiguiente, es razonable suponer que habrá aumentado la demanda de gasto en estas políticas, fundamentalmente entre las mujeres.

EVOLUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO DURANTE LA PANDEMIA

Es ya un hecho contrastado que la pandemia de la COVID-19 ha afectado, en sus diversas vertientes, más intensamente a las mujeres que a los hombres, y así lo ha evidenciado tanto la literatura científica como los informes realizados por organismos nacionales e internacionales (Adams-Prassl *et al.*, 2020; De Paz *et al.*, 2020; Alon *et al.*, 2020; Wenham *et al.*, 2020; Reichel *et al.*, 2020; ONU, 2020; WEF, 2020; IMIO, 2020; EMAKUNDE, 2020). Para ilustrar el aumento de las desigualdades de género en España durante esta etapa, se van a exponer una serie de datos sobre los efectos de la crisis a nivel sanitario, económico, laboral y familiar.

Comenzando por el ámbito de la salud, en el primer período de la pandemia (hasta verano de 2020), seis de cada diez personas diagnosticadas con COVID-19 eran mujeres –lo que supone un 57% de los contagios, frente al 43% entre los hombres–; en junio de 2021, un 52% del total de contagiados son mujeres y un 48% hombres (Ministerio de Sanidad, 2021). A lo anterior hay que añadir la mayor carga de trabajo sanitario que asumen las mujeres, quienes representan el 70% de los trabajadores en el sector sociosanitario. Los datos son incontestables: el 51% de los médicos, el 84% del personal de enfermería, el 72% de los farmacéuticos, el 82% de los psicólogos y el 84% de los trabajadores de establecimientos residenciales para mayores y personas dependientes son mujeres (EPA, 2021). Estas cifras también han influido en el desarrollo de la enfermedad en función del sexo, pues entre el personal sanitario y sociosanitario el número de mujeres contagiadas cuadruplicaba el número de hombres.

Por lo que se refiere al ámbito laboral y económico, a nivel mundial, las mujeres tienden a ganar menos, ahorrar menos, tener trabajos menos seguros y es más probable que estén empleadas en sectores informales (ONU, 2020). Estas condiciones hacen que partan de una situación más vulnerable para afrontar el impacto de la COVID-19. En las anteriores recesiones económicas, especialmente durante la Gran Recesión³, la reducción de la tasa de empleo y del nivel de ingresos fue superior, inicialmente, para los hombres, que suelen trabajar en sectores más afectados por los cambios de ciclo, como la construcción y determinadas industrias (Alon *et al.*, 2020). Posteriormente, cuando se pusieron en marcha las políticas de austeridad del gasto a partir de 2011, el desempleo perjudicó en mayor medida a las mujeres, porque un elevado porcentaje trabajan en el sector público, fuertemente afectado por los recortes (Rubery, 2015). Por consiguiente, pueden diferenciarse dos tipos de impacto de las recesiones sobre las desigualdades de género en el empleo: uno, de la crisis en sí y, otro, de las políticas aplicadas en respuesta a esta problemática (Cook y Grimshaw, 2021).

Por el contrario, en la crisis del coronavirus, muchos de los sectores laborales fuertemente afectados están altamente feminizados –sanitario, sociosanitario, hostelería, etc.– y si, previamente, algunas de estas áreas adolecían de una elevada precariedad, en el contexto actual será mayor (OIT, 2021). Las mujeres tienen una presencia significativa en algunos de los sectores que han detenido su actividad durante el confinamiento, como turismo, hostelería,

³ Véase Peinado y Serrano (2018) para una revisión bibliográfica, y para la descripción de la evolución de las diferencias de género en Europa en el contexto de la Gran Recesión.

comercio al por menor, limpieza doméstica, cuidado de niños, etc., y presentan mayor probabilidad de pérdida de empleo, temporal o definitiva.

La tasa de empleo era menor entre las mujeres que entre los hombres antes de la COVID-19, y sigue siendo menor hoy en día. En concreto, la tasa de empleo femenino que era del 45% en 2019, bajó hasta el 41,7% en 2020, mientras que la tasa de empleo masculino pasó del 56,4% en 2019 al 53,7% en 2020 (EPA, 2020). En la misma línea, la tasa de paro femenina es mayor tanto en la etapa previa a la pandemia como en la etapa posterior al confinamiento: 16% entre las mujeres en 2019, y 17% en 2020; 12,5% entre los hombres en 2019, y 14% en 2020. La información correspondiente a mayo de 2021 indica que, del total de desempleados en España, un 41,8% son hombres y un 58,2% son mujeres (EPA, 2021). A esta situación hay que agregar la brecha salarial, que se sitúa en torno al 22%, y que se ha elevado a raíz de la emergencia sanitaria hasta los niveles de hace ocho años (INE, 2021).

Estos datos ponen de manifiesto que, en épocas de crisis, la situación laboral de las mujeres empeora más que la de los hombres, debido al mayor porcentaje que se sitúan en las zonas más precarias del mercado de trabajo (contratación temporal, jornada a tiempo, profesiones menos valoradas, trabajos en economía sumergida, etc.), algo que también ha sucedido en el año 2020 debido a los efectos de la pandemia en la actividad económica. Además, muchas han tenido que afrontar esta crisis sin haberse recuperado de la crisis financiera de 2008. Por estos motivos, es necesario que se desarrollen políticas de empleo/desempleo con una lente de género, no basta con tratar de reactivar las actividades económicas y potenciar el teletrabajo si no cuestiona la tradicional división del trabajo doméstico entre sexos, o si no se atiende a la precaria situación laboral de la que parten algunas mujeres (Cook y Grimshaw, 2021: 224).

En cuanto al ámbito familiar y social, antes de 2020 en numerosos países se había producido un cambio relevante: los roles de los hombres se habían mantenido estables a lo largo del tiempo, pero los roles de las mujeres se habían expandido fuera del hogar, con una altísima incorporación al mercado de trabajo (ONU, 2020). A pesar de esto, las expectativas de género siguen siendo, en muchos casos, las mismas: se espera que realicen trabajos remunerados y contribuyan al sostenimiento de la economía familiar y, paralelamente, se espera que realicen la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados (OIT, 2020). Lamentablemente, equilibrar estas dos expectativas habitualmente es un desafío, y una opción casi imposible durante una crisis global. De hecho, lo que parece haber sucedido es que las mujeres,

especialmente aquellas que viven en pareja y tienen hijos, han tenido que reducir su tiempo de trabajo para hacerse cargo de las tareas domésticas y de cuidado, mientras que los hombres lo han hecho un porcentaje limitado de los casos (Fisher y Ryan, 2021).

Antes de la COVID-19, las mujeres dedicaban aproximadamente un tercio más de tiempo que los hombres a las tareas del hogar y los cuidados familiares en España, y se estima que el 70% de estas tareas recaen en las primeras (IMIO, 2020:6). Estas han aumentado durante la pandemia, más aún durante el confinamiento, por el cierre de los centros educativos, el cese del trabajo de las empleadas del hogar, la suspensión de servicios que facilitan la conciliación fuera del horario escolar (servicios de comedor, campamentos, etc.), y finalmente, la interrupción o modificación de los servicios de atención a personas mayores y personas con discapacidad u otras necesidades sociales (EMAKUNDE, 2020: 12-13).

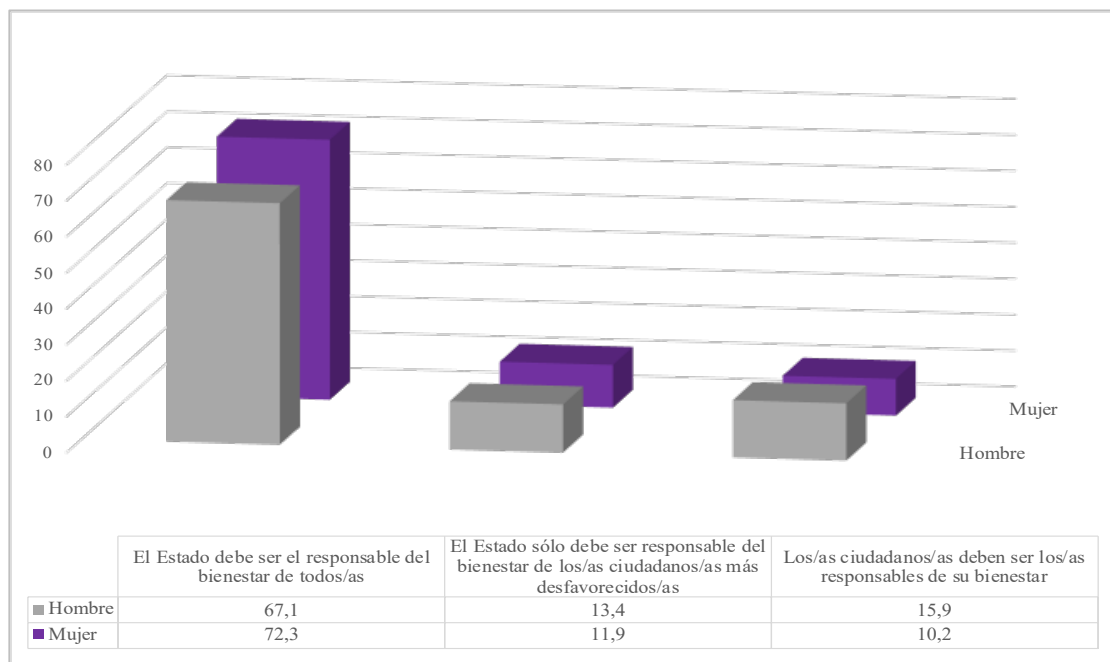
Todo ello ha provocado una “re-familiarización de los cuidados”, incluyendo la formación de los hijos, pues las familias debían asumir el seguimiento de las tareas escolares. Aunque se han compartido algunas de estas tareas, el reparto ha sido inequitativo, lo que significa que las mujeres han debido hacerse cargo en mayor medida de las consecuencias de la pandemia en el ámbito familiar y continuar siendo productivas (Farré y González, 2020). Este reparto de tiempos poco igualitario, lo que hace que las mujeres hayan tenido más dificultades para la conciliación de la vida laboral y familiar. Una consecuencia es que se ha hecho visible que las tareas de cuidado son imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad y para las mujeres (Collins *et al.*, 2020), lo que puede haber afectado a la demanda de intervención de los poderes públicos en estas áreas.

En lo referente a esta última cuestión, para examinar las diferencias en las actitudes de mujeres y hombres hacia el papel que debe adoptar el Estado en la provisión de medios a la ciudadanía, se han recopilado datos procedentes del Barómetro de marzo de 2021 del CIS, centrado en los efectos de la COVID-19. La encuesta incluye una pregunta en la que se interroga a los entrevistados por el nivel de responsabilidad que debe asumir el Estado en el bienestar de los ciudadanos (*Gráfico 1*). Los resultados indican que los españoles, en general, son profundamente intervencionistas, la mayoría aspira a que el Estado se responsabilice del bienestar de todos los ciudadanos y proporcione cuantos servicios sean necesarios para atender a sus problemas. No obstante, se aprecia un gap significativo, un 5% más de mujeres que de hombres se inclina por este modelo universalista de Estado de Bienestar, es decir, las primeras se muestran más intervencionistas. Por el contrario, el porcentaje de hombres que afirman que

los ciudadanos/as deben ser responsables de su propio bienestar supera por seis puntos al porcentaje de mujeres. Comentar que esta misma pregunta se incluyó en el Estudio 2.911 de 2011, evidenciándose que ese gap era menor: el 68% de las mujeres y el 66,3% de los hombres consideraban que el Estado es responsable del bienestar de todos. No solo ha aumentado la brecha durante la pandemia, ha aumentado el nivel de intervencionismo que prefieren las mujeres respecto a la anterior crisis económica.

Estos datos son congruentes con los resultados de estudios previos que habían constatado que las mujeres tienden a considerar con mayor frecuencia que los hombres que el Estado es responsable de que todos los ciudadanos alcancen ciertos niveles de calidad de vida (Huddy *et al.*, 2008; Crowder-Mayer, 2007; O’Neill, 2003; Svallfors, 1997). Y esta tendencia se acentúa en períodos de recesión (Cicuéndez, 2018).

Gráfico 1.
Responsabilidad del Estado en el bienestar de los ciudadanos, por sexo (2021)



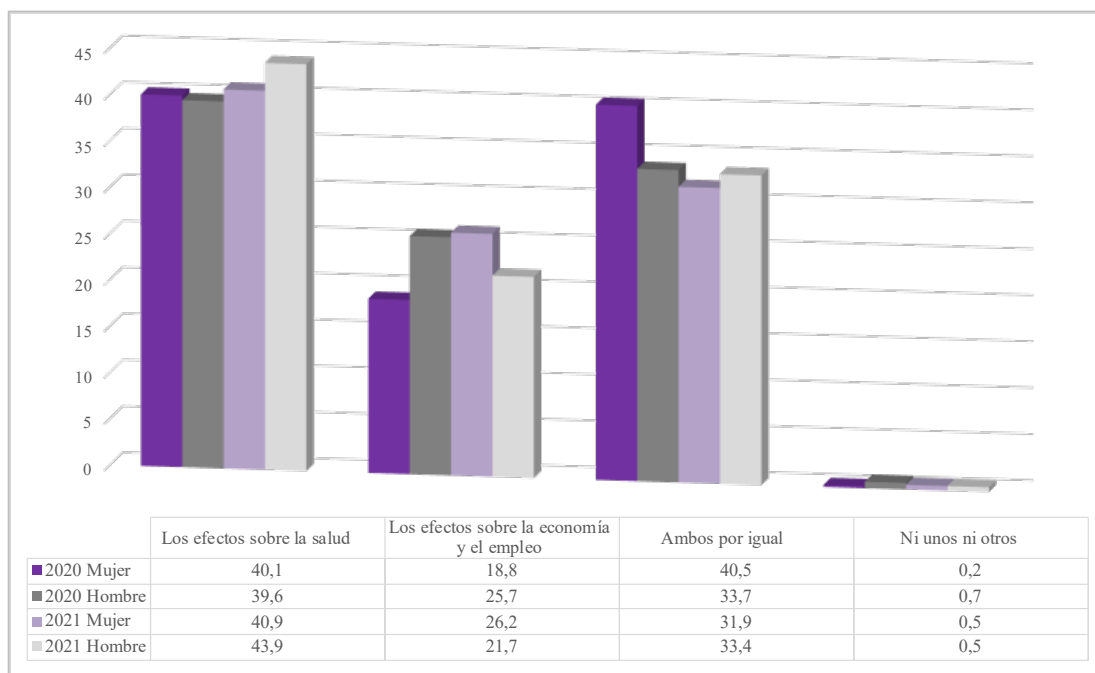
Pregunta: “¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?”

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio 3.313 del CIS.

En otro orden de cosas, se comentó en el epígrafe anterior que algunos trabajos han encontrado que las mujeres se muestran más pesimistas respecto al impacto de la COVID-19 en su salud y en su situación financiera, y están bastante más preocupadas por la pandemia y su

trascendencia (Fan *et al.*, 2020; Galasso *et al.*, 2020). En el *Gráfico 2* figuran los porcentajes de respuesta, clasificados por sexo, relativos a las posibles consecuencias de esta crisis en España. Indicar que ambos grupos están más concienciados sobre las repercusiones que este proceso pueda tener sobre la salud que sobre la situación económica y laboral. Se observa que en 2020 hombres y mujeres mostraban el mismo interés por los efectos del coronavirus sobre la salud, mientras que en 2021 los hombres están más preocupados por el impacto sobre su salud. Sorprendentemente, en 2020 las mujeres se mostraban bastante menos preocupadas por los efectos de la COVID-19 sobre la economía y el empleo pero, unos meses después, la pauta ha cambiado y manifiestan un temor notablemente superior al de los hombres por el impacto económico y laboral, con un diferencial de 5 puntos. Se aprecia una tendencia común con estudios realizados en otros países, pues el grado de preocupación de las españolas por la crisis del coronavirus es mayor. En concreto, en marzo de 2021, un 56% de las entrevistadas afirmaban que la crisis de la COVID-19 les preocupaba mucho, frente al 49% de los entrevistados.

Gráfico 2.
Valoración de las consecuencias económicas y laborales de la crisis de la COVID-19, por sexo (2020 y 2021)



Pregunta: “En estos momentos, ¿qué le preocupa a Ud. más, los efectos de esta crisis sobre la salud, o los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo?”.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 3.305 de 2020 y 3.313 de 2021 del CIS.

LA BRECHA DE GÉNERO EN LAS PREFERENCIAS DE POLÍTICA PÚBLICA A LO LARGO DE LA PANDEMIA

En este epígrafe se aborda el estudio de la brecha de género en las preferencias de política pública durante la pandemia, mediante el análisis de la demanda de gasto público de mujeres y hombres en cinco políticas públicas que han sido esenciales en esta situación de crisis: protección al desempleo, pensiones, sanidad, educación y ayuda a personas dependientes. Los datos utilizados proceden de cuatro Estudios del CIS realizados antes y durante la pandemia (2019, 2020 y 2021), con una muestra aproximada de 2.500 entrevistados, en los que se incluye una pregunta de encuesta en la que se plantea a los ciudadanos si creen que el Estado dedica “demasiados recursos”, “los justos” o “muy pocos” a una serie de programas. A partir de esta pregunta se construye un indicador para medir las preferencias de gasto (Smith, 1987), denominado *índice porcentual de demanda*⁴ (ID), que evalúa la intensidad de la intervención estatal que se desea en cada política pública a través del gasto. Se calcula restando al porcentaje de entrevistados que creen que el Estado dedica demasiados recursos a la política x, el porcentaje de aquellos que consideran que le dedica muy pocos recursos. Si el índice es negativo significa que se demanda un incremento en el gasto destinado a esa materia; si es positivo significa que se valora que el gasto es excesivo. Los resultados, que figuran en la *Tabla 1*, se han organizado en dos submuestras según el sexo del encuestado. En esta tabla se incluye otro indicador, la *brecha de género*, que mide la diferencia entre el valor observado en el índice de demanda (ID) de mujeres y hombres, de manera que un valor negativo revela que la demanda femenina es mayor, que las mujeres son más favorables al aumento del gasto.

Los resultados indican que existe brecha de género en las cinco políticas públicas seleccionadas, debido a que la demanda de gasto de las mujeres es superior en todas las fechas y en todos los ámbitos. Las diferencias en algunas áreas no son porcentualmente muy amplias, sí relevantes, porque la existencia de esta fractura puede tener repercusiones en las demandas hacia el sistema político, en un momento crucial para contrarrestar el aumento de las desigualdades de género que ha generado la pandemia en diversos ámbitos (IMIO, 2020). Los coeficientes de la prueba T de Student (*Tabla 1*), que establece si la diferencia entre las medias de las muestras de hombres y de mujeres es estadísticamente significativa, confirman que existe

⁴ Este índice, que Smith (1987: 8) llamó “*balance of opinions*”, mide el nivel de apoyo agregado al gasto en cada área de política pública.

una brecha de género en las preferencias de gasto en todas las políticas, más amplia en los programas de protección al desempleo y de pensiones.

Tabla 1.
Los cambios en las preferencias de gasto público en diversas áreas de política pública durante la pandemia, según el sexo (2019-2021)

		ID mujeres %	ID hombres %	Brecha de género	Diferencia de medias ¹	% N.S. mujeres	% N.S. hombres
Protección al desempleo	2019	-48,9	-43,9	-5,0	-0,427	15,9	9,3
	2020	-45,7	-33,7	-12,0	-0,510	12,0	7,3
	2021	-61,3	-49,2	-12,1	-0,518	9,5	6,5
Pensiones/ Seguridad Sc.	2019	-63,8	-56,7	-7,1	-0,195	9,8	7,6
	2020	-57,8	-50,4	-7,4	-0,256	8,6	5,2
	2021	-64,0	-54,3	-9,7	-0,261	6,8	4,5
Sanidad	2019	-61,1	-55,0	-6,1	-0,180	6,4	4,4
	2020	-73,3	-70,1	-3,2	-0,174	4,5	2,2
	2021	-75,3	-70,9	-4,4	-0,118	3,9	2,7
Educación	2019	-53,9	-51,2	-2,7	-0,189	10,7	8,2
	2020	-62,8	-55,2	-7,6	-0,271	7,8	4,5
	2021	-61,7	-58,5	-3,2	-0,179	6,8	4,5
Ayuda personas dependientes²	2019	-64,6	-60,6	-4,0	-0,127	14,5	12,9
	2020	-66,1	-62,0	-4,1	-0,211	11,4	8,7

¹ La diferencia de medias se obtiene aplicando la prueba T de Student, que mide si la diferencia entre dos grupos dentro de la misma variable dependiente es significativa. Cuanto mayor es el coeficiente, más significativa es la diferencia entre las dos muestras.

² No hay datos para 2021.

Pregunta: “Como Ud. sabe, las distintas administraciones públicas destinan el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones. Dígame, por favor, si cree que dedican demasiados, los necesarios o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar”.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Estudios 3.259 de 2019, 3.290 de 2020 y 3.313 de 2021 del CIS.

Otro hallazgo interesante es que el gap se ha acentuado durante la pandemia en todas las políticas públicas, excepto en sanidad. Estos datos son congruentes con la hipótesis de investigación planteada, el diferencial en la demanda de gasto público de hombres y mujeres en una serie de programas sociales básicos ha crecido en la crisis de la COVID-19. Esta crisis ha tenido, y tendrá, impactos muy negativos para la sociedad española a nivel económico, laboral, sanitario, social y familiar, pero sus efectos han sido más graves para muchas mujeres –como se ha constatado en el apartado anterior–, lo que se refleja en su demanda de recursos destinados a financiar aquellas políticas que puedan dar respuesta a sus necesidades y problemas. Investigaciones previas confirmaron que la brecha de género en las preferencias de gasto público tiende a crecer en los períodos de crisis (Cicuéndez, 2018).

La demanda de gasto público es muy elevada en ambos grupos, el ID supera claramente el 50% en todas las áreas, excepto para desempleo en 2019 y 2020. Las políticas que más han apoyado las mujeres durante la pandemia, en términos presupuestarios, son sanidad, ayuda a dependientes y educación, en ese orden. La evolución de la demanda en sanidad resulta coherente con el aumento de la preocupación por la salud y por el funcionamiento del sistema sanitario. Es preciso recordar que, inicialmente, hombres y mujeres mostraban unos niveles similares de preocupación por los efectos del coronavirus sobre la salud y, posteriormente, los primeros se manifiestan más preocupados por este problema. Esto se ha traducido en un incremento de 15 puntos en el ID de los hombres en apenas unos meses, hasta prácticamente se ha equiparado al ID de las mujeres, que también ha subido notablemente, aunque no al mismo ritmo. Lógicamente, esta evolución también está relacionada con el hecho de que la pandemia ha puesto al sistema sanitario en el centro del debate, sus virtudes y sus problemas. Así, el 84,5% de los hombres y el 86,8% de las mujeres consideraban en diciembre de 2020 que es necesario reformar la sanidad (Estudio 66091220), lo que implicaría un aumento del gasto destinado a esta política. Cabe señalar las mujeres se han mostrado tradicionalmente más favorables al incremento del presupuesto en sanidad, lo que podría estar relacionado con el hecho de que son ellas quienes habitualmente se ocupan del cuidado de los miembros de la familia que estuvieran enfermos, o trabajan como cuidadoras profesionales de enfermos y ancianos, y les acompañan a los servicios de salud, por lo que son más conscientes de las insuficiencias y necesidades existentes.

El grado de apoyo al gasto en la política de ayuda a personas dependientes es muy elevado desde que apareciera este ítem en las encuestas, en 2011, debido a la debilidad financiera con la que nació este programa. Contrariamente a lo que pudiera suponerse, la brecha de género en esta área es reducida, si bien se ha duplicado en el año de pandemia. Asimismo, llama la atención que el ID no haya crecido en mayor proporción, cuando la lógica sugiere que todo lo relativo al cuidado de personas dependientes debería haberse priorizado en esta etapa, en la que se han puesto de manifiesto las dificultades que han afrontado los hogares para sostener por sí mismos toda la carga de trabajo derivada de los cuidados de personas dependientes. La explicación puede estar en que, antes de la crisis, el nivel de demanda ya era muy alto, y a que no se dispone de datos correspondientes a 2021.

Por lo que se refiere a la política de educación, ha sido otro de los sectores más afectados por la pandemia, en tanto en cuanto el confinamiento supuso el cierre de los centros educativos, con el consiguiente traslado a los padres de parte de la responsabilidad en el seguimiento y

apoyo a los hijos en sus tareas escolares, actividad que han realizado mayoritariamente las mujeres (Farré y González, 2020). Esta situación ha puesto de relieve algunas carencias del sistema educativo, como la falta de recursos y personal que se arrastraba desde la crisis económica de 2008. Así, la demanda femenina de gasto en educación, que en 2019 era moderada, crece el año siguiente nueve puntos porcentuales, mientras que la demanda masculina solo crece cuatro puntos. Este diferencial implica que se amplíe la brecha de género en las preferencias de gasto para financiar la enseñanza, que se había reducido entre 2016 y 2018.

Mención aparte merece la política de protección al desempleo. Se ha producido un cambio drástico de tendencia con el desarrollo de la pandemia. Aunque en 2018 el apoyo al gasto para estas prestaciones era mayor entre los hombres, y en 2019 se invierte la pauta, de manera que pasa a ser superior entre las mujeres. El dato más destacable es, sin embargo, la subida de 15 puntos del ID femenino y de 13 puntos del ID masculino entre 2020 y 2021. Los datos respaldan la tesis de que las mujeres están especialmente preocupadas por la situación laboral, y por el impacto que la crisis de la COVID-19 vaya a tener en el empleo a corto y medio plazo, lo que supone que la fractura de género en esta política sea la mayor de todas.

Finalmente, las preferencias en materia de seguridad social siguen una evolución peculiar en este período. La política de pensiones es la que goza de mayor apoyo social en España, de manera que la demanda de recursos se mantiene siempre en niveles muy altos independientemente del sexo, a pesar de lo cual existe cierto gap. Desde 2019 el nivel de demanda disminuye, sobre todo en 2020 y más intensamente entre los hombres. Esto implica que las mujeres sean, en 2021, mucho más favorables al incremento de la financiación para las pensiones que los hombres, con una diferencia de casi 10 puntos.

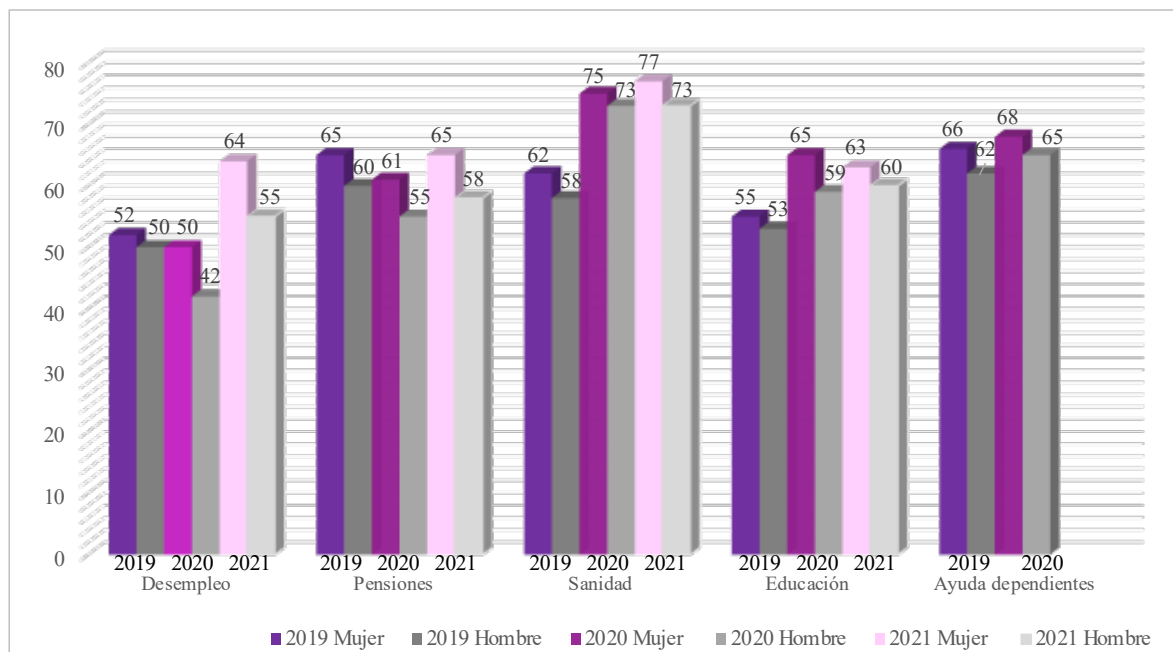
Estas actitudes pueden tener relación con la existencia de una brecha de género en el propio sistema de pensiones, que ha analizado un informe del Banco de España publicado en 2021. Los porcentajes de altas en el sistema varían sustancialmente en función del sexo: las altas de pensiones de jubilación representan un 68% del total de altas en el caso de los hombres, frente a un 39% en el de las mujeres; y las de incapacidad permanente, un 22% del total de altas corresponden a hombres y un 12% a mujeres (Hernández de Cos, 2020: 35-36). Asimismo, la diferencia entre el nivel medio de las pensiones de hombres y mujeres era, en 2019, del 25% a favor de los primeros, pese a que se ha reducido en los últimos años. Estas disparidades pueden surgir como consecuencia de las desigualdades en el mercado laboral a lo largo del ciclo vital

y de ciertas características del sistema que penalizarían más a las mujeres que a los hombres (Hernández de Cos, 2020: 38). Sea como fuere, esa brecha de género persiste, y es uno de los factores que incidiría en que las mujeres reclamen que se destine más dinero público a financiar tales prestaciones con la intención de que puedan contrarrestarse estas desigualdades, más aún ahora que se va a cerrar la reforma del sistema de pensiones.

Por otra parte, señalar que se aprecian diferencias sustanciales en el porcentaje de mujeres y hombres que responden “no sabe”, cuando se les pide su opinión sobre estas cuestiones. Esta tendencia es relevante porque podría indicar que las primeras están menos interesadas en la política y que son menos propensas a expresar su opinión sobre determinadas cuestiones políticas. El número de entrevistadas que afirman no saber si los recursos son suficientes o no en las distintas políticas es superior en todos los casos al porcentaje de entrevistados, principalmente en protección al desempleo, pese a que los porcentajes de respuestas “N.S.” han bajado notablemente en este período, principalmente entre las mujeres. Conforme a los datos de investigaciones previas (Sánchez-Vitores, 2018), el nivel de interés y el conocimiento que expresan las mujeres depende del área de política pública, y del contexto, porque ciertas materias son más relevantes para ellas, sobre todo en determinadas situaciones que les afectan directamente a su vida personal y familiar.

Con la finalidad de ofrecer una visualización clara de los cambios en las preferencias de gasto público en la crisis de la COVID-19, el *Gráfico 3* muestra los datos sobre la valoración de españoles y españolas de la suficiencia de los recursos públicos destinados a financiar las cinco políticas analizadas antes y durante la crisis sanitaria. En 2019, la demanda femenina neta de recursos era más elevada en las cinco políticas, y esta pauta se ha acentuado. Actualmente, el porcentaje de mujeres que valoran que los recursos son insuficientes es superior al porcentaje de hombres en todas las áreas, observándose que la diferencia más amplia corresponde a protección al desempleo, programa en el que la demanda femenina de gasto creció abruptamente, como se ha explicado. Con todo, las preferencias de política pública son similares, ambos sexos reclaman mayor financiación para sanidad en primer lugar y, después, para ayuda a dependientes. En definitiva, durante la pandemia, las mujeres han considerado esenciales los programas de transferencias de rentas para garantizar su seguridad económica y material, mientras que la política sanitaria se ha convertido en la prioridad básica para hombres y mujeres.

Gráfico 3.
Valoración de la suficiencia de los recursos¹ destinados a financiar diversas políticas públicas antes y durante la pandemia, por sexo (2019, 2020 y 2021)



¹ Porcentaje de entrevistados/as que afirman que los recursos son “muy pocos”.

Pregunta: “Como Ud. sabe, las distintas administraciones públicas destinan el dinero que en España pagamos en impuestos a financiar los servicios públicos y prestaciones. Dígame, por favor, si cree que dedican demasiados, los necesarios o muy pocos recursos a cada uno de los servicios que le voy a mencionar”.

Fuente: Elaboración propia a partir de los 3.259 de 2019, 3.290 de 2020 y 3.313 de 2021 del CIS.

Para finalizar este apartado, se incluyen en la *Tabla 2* los datos sobre la disposición a pagar impuestos a cambio de servicios y prestaciones públicos, procedentes de una pregunta incluida en los estudios del CIS en la que se explica a los entrevistados que algunas personas creen que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque para ello haya que pagar más impuestos (se situarían en el punto 0 de la escala), y que otras piensan que es preferible pagar menos impuestos, incluso si supone reducir servicios y prestaciones (se situarían en el punto 10). Se pretende comprobar si las reivindicaciones de mujeres y hombres para que se incremente el gasto público se corresponden con su propensión a pagar más impuestos para financiarlo.

La mayoría se ubica en la zona media de la escala (5), pero es superior el porcentaje de mujeres que elige las posiciones más moderadas (de 4 a 6), en torno al 50% en 2019. La característica más destacable es que los hombres muestran mayor disposición a pagar más impuestos para mejorar servicios, y esta pauta se ha acentuado en la pandemia. Se ha duplicado

el porcentaje de entrevistados y entrevistadas dispuestos a soportar un incremento de la presión fiscal para mejorar las prestaciones públicas entre 2019 y 2020, no obstante continúa siendo mayor la proporción de hombres que apoyan esta opción. Una proporción minoritaria de entrevistados de ambos sexos se decantan por reducir impuestos a cambio de perder prestaciones.

Tabla 2.
Valoración del aumento de los impuestos para tener mejores servicios públicos y prestaciones sociales, según el sexo (2019 y 2020) (escala 0-10)

	2019			2020		
	Mujer	Hombre	Diferencia	Mujer	Hombre	Diferencia
0 Mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos	8,9	11,0	-2,1	19,4	22,5	-3,1
1	4,3	6,4	-2,1	4,5	5,5	-1,0
2	8,6	9,5	-0,9	7,5	8,9	-1,4
3	11,9	13,0	-1,1	8,0	7,6	0,4
4	11,4	9,6	1,8	5,3	5,1	0,2
5	33,0	29,2	3,8	30,9	25,0	5,9
6	5,5	4,6	0,9	4,9	5,3	-0,4
7	5,0	5,0	0,0	4,0	5,1	-1,1
8	3,9	4,4	-0,5	3,4	4,5	-1,1
9	1,1	1,3	-0,2	1,3	1,8	-0,5
10 Pagar menos impuestos aunque haya que reducir los servicios públicos	1,6	2,3	-0,7	3,3	4,4	-1,1
N.S.	3,8	2,1	1,7	4,9	2,1	2,8
Media	4,1	4,0	0,2	3,8	3,7	0,1
Desviación típica	2,2	2,4	-0,2	2,7	22,5	-3,1

Pregunta: Algunas personas piensan que deberían mejorarse los servicios públicos y las prestaciones sociales, aunque haya que pagar más impuestos, (en una escala de 0 a 10, estas personas se situarían en la posición 0). Otras piensan que es más importante pagar menos impuestos, aunque eso signifique reducir los servicios públicos y prestaciones sociales, (se situarían en la posición 10 de la escala). Y hay otras que se sitúan en posiciones intermedias. ¿En qué lugar se situaría Ud.?

Fuente: Estudios 3.259 de 2019 y 3.290 de 2020, del CIS.

En definitiva, los resultados de este análisis exploratorio sugieren que la brecha de género en las preferencias de política pública se ha ampliado durante la pandemia en los programas esenciales del Estado de Bienestar que pueden contribuir a superar esta crisis. Las diferencias de género se producen en todas las áreas, pero su intensidad varía en función de la política, lo que indica que las percepciones y expectativas sobre el reparto de los recursos públicos son

distintas, y que estas diferencias se han acentuado en una situación que ha incidido negativamente en las desigualdades de género, como ha sido la crisis de la COVID-19.

CONCLUSIONES

La pandemia originada por la COVID-19 está teniendo y tendrá importantes consecuencias sobre la igualdad de género, en España y en otras democracias occidentales. Esta crisis no es solo sanitaria, está originando graves efectos a nivel económico, laboral, educativo y familiar, que han provocado un incremento de las desigualdades de género desde 2020, en un momento en que el país estaba todavía recuperándose de la Gran Recesión que comenzara en 2008. En este contexto, la investigación se ha centrado en objetivos básicos. Primero, describir algunos de los principales impactos de la pandemia sobre la salud, la economía, el empleo y las relaciones sociales y familiares, con el propósito de comprobar si tales impactos han afectado en mayor medida a las mujeres que a los hombres, y esta situación hubiera contribuido a ampliar la fractura de género. Segundo, analizar las preferencias de política pública de mujeres y hombres en España antes y durante la pandemia, a través del estudio de las demandas de gasto de cada sexo en diversos programas públicos que resultan críticos para superar las consecuencias de esta crisis. La finalidad de este trabajo, de carácter descriptivo, era comprobar si existía una brecha de género significativa en las preferencias de gasto estas políticas, y determinar si había aumentado o disminuido a lo largo de la crisis de la COVID-19, debido a esa desigual incidencia que está teniendo sobre mujeres y hombres.

La primera conclusión es que la pandemia ha supuesto un duro golpe en el avance hacia la igualdad de género en nuestro país, avance que había sido muy positivo desde 2010⁵. Esta crisis, como las anteriores, ha tenido un impacto de género significativo, y no sólo en términos de prevalencia de la enfermedad del Coronavirus. Las mujeres, que desempeñan en mayor porcentaje trabajos a tiempo parcial y trabajos en el sector informal (precarios y de baja remuneración), han experimentado un mayor desempleo, han visto reducidas en buena medida sus horas de trabajo remunerado, y se prevé que el número de mujeres que perderán su empleo a consecuencia de la paralización de la economía será superior que el de los hombres. Adicionalmente, las tareas del hogar, así como el cuidado de niños, ancianos y personas

⁵ Véanse los datos del índice de igualdad de género elaborado por *The European Institute for Gender Equality* (<http://eige.europa.eu/gender-equality-index>).

enfermas o dependientes, ha recaído principalmente en las mujeres, produciéndose una “re-familiarización” de los cuidados, que ha agravado los problemas de aquellas para la conciliación de la vida laboral y familiar. En este escenario, es previsible que la pandemia perjudique más a las mujeres, pues afecta a su autonomía económica, su vulnerabilidad social y su situación familiar, por lo que era pertinente preguntarse si son más favorables que los hombres a que el Estado intervenga intensivamente para desarrollar políticas de gasto que palién de alguna manera estos problemas, y den respuesta a sus necesidades específicas en la actual coyuntura.

En respuesta a esta cuestión, la segunda conclusión es que, en la pandemia, ambos sexos apoyan categóricamente la intervención del Estado, que debe asumir competencias sustanciales en la provisión de medios y servicios públicos a todos los ciudadanos/as, y no solo a aquellos más desfavorecidos. No obstante, las mujeres son mucho más proclives a la implantación de un Estado fuertemente intervencionista que garantice el bienestar de todos los ciudadanos, según habían constatado investigaciones previas (Huddy *et al.*, 2008; Crowder-Mayer, 2007; Andersen, 1999; Svallfors, 1997), y tal y como había sucedido en crisis anteriores (Fox y Oxley, 2015; Migheli, 2014).

La tercera conclusión es que las preferencias de mujeres y hombres respecto a los recursos que deben destinarse a financiar las políticas básicas en esta pandemia son similares, y han ido cambiando en la misma dirección. Ambos muestran un firme respaldo a las políticas básicas del Estado de bienestar que están resultando cruciales, y demandan un fuerte aumento del presupuesto para todas ellas. Destaca, especialmente, el apoyo al incremento del gasto público consignado a sanidad, lo que resulta lógico en una crisis de salud pública que ha puesto a prueba el sistema sanitario a todos los niveles, y que ha elevado a cotas desconocidas la preocupación de españoles y españolas por los efectos del coronavirus sobre su salud. Algo similar ocurre en educación y ayuda a personas dependientes, políticas que han sido imprescindibles en el sostenimiento de la sociedad a lo largo de la pandemia, por lo que el nivel de demanda de gasto público es muy elevado, particularmente entre las mujeres. De hecho, uno de los principales hallazgos es que la demanda de gasto femenina es superior en todas las áreas analizadas, especialmente, en protección al desempleo.

En relación con lo anterior, se ha constatado que existen disparidades significativas en las preferencias de gasto en función del sexo, que han aumentado a lo largo de la crisis de la COVID-19. Los resultados son congruentes con la hipótesis de partida, se ha ampliado la brecha

de género en las preferencias de política pública durante la pandemia. Esta acentuación del gap es una muestra de las distintas consecuencias que esta ha tenido sobre mujeres y hombres, y de sus distintas percepciones sobre los efectos de la emergencia sanitaria en su situación. Así, se ha invertido la tendencia hacia la reducción de la distancia de género en la demanda de gasto que había predominado hasta 2018.

Es pertinente señalar que las diferencias de género en las actitudes hacia el gasto son más intensas y persistentes en determinadas políticas, observándose cierto sesgo. El mayor gap se produce, como cabría esperar, en la demanda de recursos públicos para financiar la protección al desempleo, pues la demanda femenina ha crecido excepcionalmente en el último año. Del mismo modo, existe una importante fractura en la demanda de gasto para financiar las pensiones. Por tanto, las mujeres respaldan primordialmente el incremento del presupuesto destinado a sufragar los programas de transferencias de rentas que, en este contexto, son esenciales para garantizar la seguridad económica de los grupos más vulnerables, tal y como indicaba la literatura previa (Lizotte, 2020; Barnes y Cassese, 2017; Fox y Oxley, 2015; Alvarez y McCaffery, 2003).

En definitiva, y dando respuesta a la pregunta del título de esta ponencia, tanto las desigualdades de género como la brecha de género en las preferencias políticas han aumentado de manera significativa durante la pandemia. La crisis sanitaria tiene distintas dimensiones e impactos y, de la misma manera, el gap tiene distintas dimensiones por lo que sería más preciso referirse no a “la brecha”, sino a “las brechas” de género en tiempos de la COVID-19.

Referencias bibliográficas

- Abendschön, Simone y Stephanie Steinmetz. 2014. “The gender gap in voting revisited: Women’s party preferences in a European context”, *Social Politics*, 21(1): 315–344. <https://doi.org/10.1093/sp/jxu009>.
- Adams-Prassl, Abi, Teodora Boneva, Marta Golin y Christopher Rauh. 2020. “Inequality in the impact of the coronavirus shock: Evidence from real time surveys”, *Journal of Public Economics*, 189: 104245. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104245>.
- Alon, Titan, Mathias Doepke, Jane Olmstead-Rumsey y Michèle Tertilt. 2020. “The impact of COVID-19 on gender equality”, *NBER Working Paper*, 26947. <https://doi.org/10.3386/w26947>.
- Alvarez, Michael y Edward McCaffery. 2003. “Are there sex differences in fiscal political preferences?”, *Political Research Quarterly*, 56(1): 5-17. <https://doi.org/10.1177/106591290305600101>.
- Andersen, Kristi. 1999. “The Gender Gap and experiences with the Welfare State”, *Political Science and Politics*, 32(1): 17-19. <https://doi.org/10.2307/420745>.
- Barnes, Tiffany y Erin Cassese. 2017. “American party women: A look at the gender gap within parties”, *Political Research Quarterly*, 70(1): 127-141. <https://doi.org/10.1177/1065912916675738>.
- Blau, Francine y Lawrence Kahn. 2017. “The gender wage gap: Extent, trends, and explanations”, *Journal of Economic Literature*, 55(3): 789-865. <https://doi.org/10.1257/jel.20160995>.
- Caughell, Leslie. 2016. *The political battle of the sexes: exploring the sources of gender gaps in policy preferences*. Lanham: Lexington Books.
- Caughey, Devin, Tom O’Grady y Christopher Warshaw. 2019. “Policy ideology in European mass publics, 1981–2016”, *American Political Science Review*, 113(3): 674-693. <https://doi.org/10.1017/S0003055419000157>.
- Cicuéndez, Ruth. 2018. “Género y Estado de bienestar: actitudes de hombres y mujeres hacia las políticas sociales en España”, en A. Gentile (Coord.), *Políticas Sociales ante horizontes de incertidumbre y desigualdad*. Libro de Actas del VII Congreso de la Red Española de Política Social, 342-365. Zaragoza: REPS.

- Collins, Caitlyn, Liana Landivar, Leah Ruppner y William Scarborough. 2020. “COVID-19 and the gender gap in work hours”, *Gender, Work and Organization*, 28(s1): 101-112. <https://doi.org/10.1111/gwao.12506>.
- Cook, Rose y Damian Grimshaw. 2021. “A gendered lens on COVID-19 employment and social policies in Europe”, *European Societies*, 23(sup1): S215-S227. <https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1822538>.
- Croson, Rachel y Uri Gneezy. 2009. “Gender differences in preferences”, *Journal of Economic Literature*, 47(2): 448-74. <http://dx.doi.org/10.1257/jel.47.2.448>.
- Crowder-Meyer, Melody. 2007. “Gender differences in policy preferences & priorities”, Paper presented at Annual Meeting of the Midwest Political Science Association. Chicago.
- De Paz, Carmen, Miriam Muller, Ana María Muñoz e Isis Gaddis. 2020. “Gender dimensions of the COVID-19 Pandemic”, *World Bank Other Operational Studies*, 33622.
- Deckman, Melissa, Jared McDonald, Stella Rouse y Mileah Kromer. 2020. “Gen Z, gender, and COVID-19” *Politics & Gender*, 16(4): 1019-1027. <https://doi.org/10.1017/S1743923X20000434>.
- Diekman, Amanda y Mónica Schneider. 2010. “A social role theory perspective on gender gaps in political attitudes”, *Psychology of Women Quarterly*, 34(4): 486–97. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2010.01598.x>.
- EMAKUNDE (Instituto Vasco de la Mujer). 2020. *La igualdad en época de pandemia. El impacto de la COVID-19 desde la perspectiva de género*. Vitoria-Gasteiz: EMAKUNDE.
- Erie, Steve y Martin Rein. 1988. “Women and the Welfare State”, en C. Mueller y C. Mueller (eds.), *The Politics of the Gender Gap: The Social Construction of Political Influence*, 173-191. London: Sage.
- Fan, Ying, Yeşim Orhun, y Dana Turjeman. 2020. “Heterogeneous actions, beliefs, constraints and risk tolerance during the covid-19 pandemic”, *National Bureau of Economic Research, Working Paper*, 27211. <https://doi.org/10.3386/w27211>.
- Farré, Lidia y Libertad González. 2020. “¿Quién se encarga de las tareas domésticas durante el confinamiento? Covid-19, mercado de trabajo y uso del tiempo en el hogar” [en línea: https://www.upf.edu/es/inicio/-/asset_publisher/1fBlrmbP2HNv/content/id/234794540/maximized#.YN2eAB3tZpQ]. Universitat Pompeu Fabra.

- Finseraas, Henning, Niklas Jakobsson y Andreas Kotsadam. 2012. “The gender gap in political preferences: an empirical test of a political economy explanation”, *Social Politics*, 19(2): 219-242. <https://doi.org/10.1093/sp/jxs005>.
- Fox, Richard L. y Zoe M. Oxley. 2015. “Women’s support for an active government”, en Kyle L. Kreider y Thomas J. Baldino (eds.), *Minority voting in the United States*, 148-167. Santa Barbara: ABC-CLIO.
- Galasso, Vincenzo, Vincent Pons, Paola Profeta, Michael Becher, Sylvain Brouard y Martial Foucault. 2020. “Gender differences in COVID-19 attitudes and behavior: Panel evidence from eight countries”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(44): 27285-27291. <https://doi.org/10.1073/pnas.2012520117>.
- Gidengil, Elisabeth y Dietlind Stolle. 2021. “Beyond the ‘Gender Gap’: The role of gender identity”, *The Journal of Politics* (Ahead of prints). <https://doi.org/10.1086/711406>.
- Gidengil, Elisabeth, André Blais, Richard Nadeau y Neil Nevitte. 2003. “Women to the left? gender differences in political beliefs and policy preferences”, en M. Tremblay y L. Trimble (eds.), *Gender and Electoral Representation in Canada*, 140-159. Don Mills ON: Oxford University Press.
- Gidengil, Elisabeth. 1995. “Economic Man-Social Women? the case of the gender gap in support for the Canada-United States Free Trade Agreement”, *Comparative Political Studies*, 28(3): 384-408. <https://doi.org/10.1177/0010414095028003003>.
- Giger, Nathalie. 2009. “Towards a modern gender gap in Europe? A comparative analysis of voting behavior in 12 countries”, *The Social Science Journal*, 46(3): 474-492. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2009.03.002>.
- Guillén, Clara. 2021. “El impacto de la pandemia por COVID-19 que ha hecho aflorar la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado de trabajo”, *Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la prevención*, 190: 25-34.
- Hernández de Cos, Pablo. 2020. “El sistema de pensiones en España: una actualización tras el impacto de la pandemia”, *Documentos Ocasionales/Banco de España*, 2106.
- Huddy, Leonie, Erin Cassese, y Mary-Kate Lizzote. 2008. “Gender, Public Opinion, and Political Reasoning”, en C. Wolbrecht, K. Beckwith y L. Baldez (eds.), *Political Women and American Democracy*, 31-49. New York: Cambridge University Press.

- Inglehart, Ronald y Pippa Norris. 2003. *Rising Tide: gender equality and cultural change around the world*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO). 2020. *La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19*. (En línea: <https://observatorioviolencia.org/informe-del-instituto-de-la-mujer-la-perspectiva-de-genero-esencial-en-la-respuesta-a-la-covid19/>).
- Iversen, Torben y Frances Rosenbluth. 2006. “The political economy of gender: Explaining cross-national variation in the gender division of labor and the gender voting gap”, *American Journal of Political Science*, 50(1): 1-19. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2006.00166.x>.
- Kaufmann, Karen M. 2006. “The Gender Gap”, *Political Science & Politics*, 39(3): 447-453. <https://doi.org/10.1017/S1049096506060884>.
- Kristal, Tali y Meir Yaish. 2020. “Does the Coronavirus pandemic level the gender inequality curve? (It doesn't)”, *Research in Social Stratification and Mobility*, 68: 100520. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2020.100520>.
- Lizotte, Mary-Kate. 2020. *Gender Differences in Public Opinion*. Philadelphia: Temple University Press.
- Migheli, Mateo. 2014. “Preferences for Government Interventions in the Economy. Does Gender Matter?”, *International Review of Law and Economics*, 39: 39-48. <http://dx.doi.org/10.1016/j.irle.2014.05.004>.
- Ministerio de Sanidad. 2021. Informe nº 83. *Situación de COVID-19 en España* (junio).
- Norrander, Bárbara. 2008. “The history of gender gaps”, en L.D. Whitaker (ed.), *Voting the Gender Gap*, 9–32. Urbana: University of Illinois Press.
- ONU. 2020. *Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women* (En línea: <https://unsdg.un.org/es/resources/informe-de-politicas-el-impacto-de-covid-19-en-las-mujeres>).
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2021. *Perspectivas sociales y de empleo en el mundo: Tendencias 2021*. (En línea: https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/WCMS_794492/lang--es/index.htm).
- Peinado, Patricia y Felipe Serrano. 2018. “Gender inequality in the labour market and the great recession”, *Inequality*, en P. Arestis y M. Sawyer (eds.) *Inequality: Trends, Causes,*

- Consequences, Relevant Policies*, 233-274. Cham: Palgrave McMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91298-1_6.
- Reichert, Malte, Kinga Makovi, and Anahit Sargsyan. 2020. "The impact of COVID-19 on gender inequality in the labor market and gender-role attitudes", *European Societies*, 23:1-18. <https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1823010>.
- Rosenfeld, Daniel y Janet Tomiyama. 2021. "Can a pandemic make people more socially conservative? Political ideology, gender roles, and the case of COVID-19", *Journal of Applied Social Psychology*, 51(4): 425-433. <https://doi.org/10.1111/jasp.12745>.
- Rubery, Jill. 2015. "Austerity and the future for gender equality in Europe", *ILR Review*, 68(4): 715-741. <https://doi.org/10.1177/0019793915588892>.
- Sánchez-Vitores, Irene. 2018. "Different Governments, Different Interests: The Gender Gap in Political Interest, Social Politics", *International Studies in Gender, State & Society*, 26(3): 348-369. <https://doi.org/10.1093/sp/jxy038>.
- Shapiro, Robert y Harpreet Mahajan. 1986. "Gender Differences in Policy Preferences: A Summary of Trends from the 1960s to the 1980s", *Public Opinion Quarterly*, 50(1): 42-61. <https://doi.org/10.1086/268958>.
- Shorrocks, Rosalind y María Grasso. 2020. "The attitudinal gender gap across generations: Support for redistribution and government spending in contexts of high and low welfare provision", *European Political Science Review*, 12(3): 289-306. <https://doi.org/10.1017/S1755773920000120>.
- Smith, Tom. 1984. "The Polls: Gender and Attitudes toward Violence", *Public Opinion Quarterly*, 48(1): 384-396. <http://dx.doi.org/10.1093/poq/48.1B.384>.
- Svallfors, Stefan. 1997. "Worlds of Welfare and Attitudes to Redistribution: A Comparison of Eight Western Nations", *European Sociological Review*, 13(3): 283-304. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a018219>.
- Wenham, Clare, Julia Smith, and Rosemary Morgan. 2020. "COVID-19: The Gendered Impacts of the Outbreak", *The Lancet*, 395(10227): 846-48. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30526-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30526-2).
- World Economic Forum. 2020. *Global Gender Gap Report 2020*. (En línea: <https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality>).